

Santiago, once de septiembre de dos mil veintitrés.

Vistos:

En estos autos RIT 0-5464-2019, RUC 1940209310-5, del Primer Juzgado de Letras del Trabajo de Santiago, por sentencia de veintiocho de mayo de dos mil veintiuno, se acogió la demanda de cobro de prestaciones laborales interpuesta por ochenta demandantes en contra de la empresa Ingeniería y Maquinarias Indak Limitada y solidariamente en contra de la empresa SCM Compañía Minera Lumina Cooper Chile, condenándolas al pago, en forma solidaria, de las indemnizaciones sustitutiva y por años de servicio y otras prestaciones que indica, con los reajustes e intereses comprendidos en los artículos 63 y 173 del Código del Trabajo.

En contra del referido fallo la demandada solidaria dedujo recurso de nulidad y una sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, por sentencia de trece de julio de dos mil veintidós, lo desestimó.

En relación a esta última decisión la misma parte interpuso recurso de unificación de jurisprudencia, solicitando que esta Corte lo acoja y dicte la de reemplazo que describe.

Se ordenó traer los autos en relación.

Considerando:

Primero: Que, de conformidad a lo dispuesto en los artículos 483 y 483-A del Código del Trabajo, el recurso de unificación de jurisprudencia procede cuando, respecto de la materia de derecho objeto del juicio, existen distintas interpretaciones sostenidas por uno o más fallos firmes emanados de los tribunales superiores de justicia. La presentación respectiva debe ser fundada, incluir una relación precisa y circunstanciada de las distintas interpretaciones respecto del asunto de que se trate, sostenida en las diversas resoluciones y que hayan sido objeto de la sentencia contra la que se recurre y, por último, se debe acompañar copia fidedigna del o de los fallos que se invocan como fundamento.

Segundo: Que la materia de derecho que la recurrente solicita unificar corresponde a determinar si *“el derecho de información parcial cede en favor del ejercicio del derecho de retención y, por lo tanto, la empresa mandante es responsable de manera subsidiaria y no solidaria”*, expresando, en síntesis, que yerra la sentencia impugnada al condenarla al pago de las indemnizaciones y prestaciones de manera solidaria, en circunstancias que resultó acreditado que el derecho de información fue ejercido de manera parcial, circunstancia que hace que éste ceda en favor del derecho de retención, concluyendo que la



responsabilidad no es otra que subsidiaria, siendo aún más valioso retener de los estados de pago de la contratista para pagar las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores subcontratados.

Agrega que lo anterior significa que si la empresa mandante ejerció de manera parcial el derecho de información, atendido el retraso en el cumplimiento de las obligaciones por parte de la empresa contratista, procede ejercer el derecho de retención, y si éste derecho fue ejercido, resulta plenamente aplicable la responsabilidad subsidiaria de la empresa mandante. Lo anterior, explica, ocurrió en la especie, al haberse acreditado que la contratista omitió la entrega de una serie de documentos y certificados que demostraran el cumplimiento oportuno del pago de las obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores, razón por la cual la empresa mandante procedió a ejercer el derecho de retención, cumpliendo con lo dispuesto en los artículos 183 letras C y D del Código del Trabajo.

Sostiene el que fallo impugnado, al estimar responsable solidariamente a la empresa mandante a pesar de haberse acreditado ejercicio parcial del derecho de información por parte de la contratista y el ejercicio del derecho de retención por parte de la empresa principal, resulta contrario a la tesis sostenida por la sentencia de contraste que acompaña, que corresponde a la dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago en autos rol N° 2.493-2020 que, a su juicio, se pronunciaría en sentido contrario.

Solicita, en definitiva, se deje sin efecto la sentencia impugnada y que, acto continuo y sin nueva vista, se dicte una en unificación de jurisprudencia que acoja el recurso de nulidad promovido, condenándola al pago de las indemnizaciones y prestaciones en forma solidaria.

Tercero: Que, para un adecuado examen del intento unificador con el fin de asentar la recta exégesis en la materia, se debe tener presente que los presupuestos fácticos que se tuvieron por acreditados en la presente causa son los siguientes:

“1. Las fechas de inicio de los servicios y las funciones desarrolladas por cada uno de los 80 actores, en los términos señalados en la demanda.

2. Que la demandada principal, empresa Ingeniería y Maquinarias Indak Limitada, se encuentra declarada en liquidación concursal por resolución de 3 de junio del año 2019, dictada en autos rol C-18233-2019, del 24° Juzgado Civil de Santiago.



3. La demandada principal adeuda a los actores los conceptos de indemnización sustitutiva de aviso previo, años de servicio, feriado legal y proporcional, remuneraciones de julio del año 2019, por los montos señalados en la demanda.

4.- Las demandadas, a lo menos entre los años 2011 a 2019, se encontraban vinculadas mediante diversos contratos de prestación de servicios por obra o faena y a plazo fijo, propios de un régimen de subcontratación, siendo la compañía SCM minera Lumina Copper Chile, dueña del Proyecto Minero Caserones en el cual se desarrollaran diversos servicios contratados a la empresa Ingeniería y Maquinaria Indak Limitada.

5.- Los certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales incorporados a juicio no abarcan todo el periodo trabajado en régimen de subcontratación por los actores, así como tampoco se encuentran en todos estos certificados adjunta la nómina de trabajadores respectivos.

6.- La demandada principal presentaba deuda previsional de algunos trabajadores desde el año 2013, y algunos periodos de los años 2014 y 2017.

Sobre la base de dichos presupuestos fácticos el tribunal del grado acogió la demanda y, en lo que interesa, condenó a la demandada compañía SCM minera Lumina Copper Chile, al pago solidario de las indemnizaciones y prestaciones que indica, atendido que *“...los certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales ...no abarcan todo el periodo trabajado en régimen de subcontratación...por consiguiente, es dable concluir que no se ejerció el derecho de información en forma íntegra, incumpliendo lo dispuesto en el inciso primero del artículo 183-C del Código del Trabajo”*, señalando, además, que *“...la demandada debió haber ejercido el derecho de retención para proceder al pago de la deuda previsional que reportaba su contratista y demandada principal respecto de los meses indicados, lo que no ocurrió, incumpliendo lo dispuesto en el artículo 183-C ya citado...”*. Finalmente, desestima la alegación de la demandada solidaria relativa a haber puesto a disposición de la liquidadora concursal los montos parciales retenidos en el ejercicio del derecho de retención, agregando que lo anterior *“...en ningún caso libera de su obligación de responder solidariamente o subsidiariamente porque la legislación laboral no lo contempla, más aun teniendo presente que ya desde el año 2013, aquella presentaba incumplimiento de obligaciones previsionales, situación conocida por la mandante,*



tal como consta de los respectivos certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales referidos...”.

La Corte de Apelaciones de Santiago, conociendo del recurso de nulidad interpuesto por la demandada solidaria fundado en la causal de infracción de ley del artículo 477 del estatuto laboral en relación con los artículos 183 letras C y D del mismo cuerpo legal y artículo 120 de la Ley N° 20.720, lo desestimó, señalando, en lo que interesa, luego de transcribir parcialmente las conclusiones de la sentencia de base, que “...ningún derecho (información y retención) cede en favor de otro, sino que ambos deben ser exigencias que la recurrente debió cumplir a fin de evitar la consecuencia que establece el legislador. Esto quedó asentado en el fallo impugnado, ya que se acreditó que no se le dio cumplimiento íntegro al derecho de ser informado, por lo que la consecuencia legal ha de ser responder de manera solidaria, tal como lo indica el artículo 183-D del Código del Trabajo”.

Cuarto: Que, para los efectos de fundar el recurso en relación con la materia de derecho en análisis, la recurrente citó el fallo dictado por la Corte de Apelaciones de Santiago en la causa rol N° 2.493-2020, referido a un recurso de nulidad interpuesto por la empresa SCM Compañía Minera Lumina Cooper Chile, en contra de la sentencia dictada por el tribunal de primera instancia que declaró su responsabilidad solidaria, estableciendo la existencia de un régimen de subcontratación con la empresa Ingeniería y Maquinarias Indak Limitada, mismas demandadas en estos autos. En cuanto a los hechos establecidos en dicho fallo de contraste, se asentó que la empresa mandante puso a disposición de la liquidadora concursal de la contratista todas las sumas de dinero retenidas a la empresa, mediante la aprobación de estados de pago por el periodo enero a abril de 2019, acreditándose que la mandante ejerció de forma parcial su derecho a información

La referida sentencia resolvió la materia de derecho en análisis señalando que “...claramente ha quedado demostrado en autos, que la recurrente hizo uso del derecho de retención de dineros, lo que a todas luces, constituye lo esencial en los casos que el contratista o subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales en la forma señalada, como aconteció en la especie, ya que la empresa principal y quien recurrió en alzada -SCM Minera Lumina Cooper Chile- retuvo de las obligaciones que tenía a favor de su mandataria, los montos de que es responsable, en



relación al trabajo en régimen de subcontratación establecido con Ingeniería y Maquinarias Indak Limitada. Ahora bien, y sobre el hecho asentado que Lumina Cooper ejerciera en forma parcial su derecho a información, cabe precisar que el derecho de retención, plenamente, observado en el caso sub-lite, resulta, sin lugar a dudas, más valioso, desde el momento que los dineros están puestos a disposición de los trabajadores para el cumplimiento oportuno de las obligaciones insolutas o impagas. Por ende, el derecho de información parcial, cede en favor del citado derecho de retención...”, razón por la que acogió el recurso de nulidad y, en la decisión de reemplazo, condenó a la empresa mandante al pago subsidiario de las obligaciones laborales y previsionales.

Quinto: Que, de lo expuesto aparece de manifiesto la existencia de distintas interpretaciones sobre una misma materia de derecho, razón por la cual corresponde señalar cual es la tesis jurídica correcta.

Sexto: Que, para efectos de resolver, es necesario señalar, en primer término, que el artículo 183-A del Estatuto Laboral dispone, lo siguiente: *"Es trabajo en régimen de subcontratación, aquél realizado en virtud de un contrato de trabajo por un trabajador para un empleador, denominado contratista o subcontratista, cuando éste, en razón de un acuerdo contractual, se encarga de ejecutar obras o servicios, por su cuenta y riesgo y con trabajadores bajo su dependencia, para una tercera persona natural o jurídica dueña de la obra, empresa o faena, denominada la empresa principal, en la que se desarrollan los servicios o ejecutan las obras contratadas. Con todo, no quedarán sujetos a las normas de este Párrafo las obras o los servicios que se ejecutan o prestan de manera discontinua o esporádica.*

Si los servicios prestados se realizan sin sujeción a los requisitos señalados en el inciso anterior o se limitan sólo a la intermediación de trabajadores a una faena, se entenderá que el empleador es el dueño de la obra, empresa o faena, sin perjuicio de las sanciones que correspondan por aplicación del artículo 478".

De su tenor se puede colegir que los requisitos que deben concurrir para que se configure un trabajo bajo ese régimen, son los siguientes: la existencia de una relación en la que participa una empresa principal que contrata a otra -contratista- que, en definitiva, es el empleador del trabajador subcontratado; que entre la empresa principal y la contratista exista un acuerdo, de carácter civil o mercantil, conforme al cual ésta desarrolla para aquélla la obra o servicio que motivó el contrato; que las labores sean ejecutadas en dependencias de la empresa principal;



que la obra o el servicio sea estable y continuo, lo que denota habitualidad e ininterrupción en la ejecución o prestación; que las labores sean desarrolladas por cuenta y riesgo del contratista o subcontratista; y que el trabajador sea subordinado y dependiente de su empleador, contratista o subcontratista.

Séptimo: Que, en lo relativo a la regulación del estatuto de responsabilidad en el régimen de subcontratación, el artículo 183-B del estatuto laboral, señala, en lo pertinente, que *“La empresa principal es solidariamente responsable de las obligaciones laborales y previsionales de dar que afecten a los contratistas en favor de los trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por término de la relación laboral. Tal responsabilidad estará limitada al tiempo o período durante el cual el o los trabajadores prestaron servicios en régimen de subcontratación para la empresa principal...”*.

Por su parte, el artículo 183-C del mismo cuerpo legal, señala, en lo que interesa, que: *“La empresa principal, cuando lo solicite, tendrá derecho a ser informada por los contratistas sobre el monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales que a éstos correspondan respecto a sus trabajadores, como asimismo de igual tipo de obligaciones que tengan los subcontratistas con sus trabajadores. El mismo derecho tendrán los contratistas respecto de sus subcontratistas.*

El monto y estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales a que se refiere el inciso anterior, deberá ser acreditado mediante certificados emitidos por la respectiva Inspección del Trabajo, o bien por medios idóneos que garanticen la veracidad de dicho monto y estado de cumplimiento. El Ministerio del Trabajo y Previsión Social deberá dictar, dentro de un plazo de 90 días, un reglamento que fije el procedimiento, plazo y efectos con que la Inspección del Trabajo respectiva emitirá dichos certificados. Asimismo, el reglamento definirá la forma o mecanismos a través de los cuales las entidades o instituciones competentes podrán certificar debidamente, por medios idóneos, el cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales de los contratistas respecto de sus trabajadores.

En el caso que el contratista o subcontratista no acredite oportunamente el cumplimiento íntegro de las obligaciones laborales y previsionales en la forma señalada, la empresa principal podrá retener de las obligaciones que tenga a favor de aquél o aquéllos, el monto de que es responsable en conformidad a este Párrafo. El mismo derecho tendrá el contratista respecto de sus subcontratistas. Si se



efectuara dicha retención, quien la haga estará obligado a pagar con ella al trabajador o institución previsional acreedora...”

Finalmente, el artículo 183-D, establece que *“...Si la empresa principal hiciere efectivo el derecho a ser informada y el derecho de retención a que se refieren los incisos primero y tercero del artículo anterior, responderá subsidiariamente de aquellas obligaciones laborales y previsionales que afecten a los contratistas y subcontratistas en favor de los trabajadores de éstos, incluidas las eventuales indemnizaciones legales que correspondan por el término de la relación laboral. Tal responsabilidad estará limitada al tiempo o período durante el cual el o los trabajadores del contratista o subcontratista prestaron servicios en régimen de subcontratación para el dueño de la obra, empresa o faena. Igual responsabilidad asumirá el contratista respecto de las obligaciones que afecten a sus subcontratistas, a favor de los trabajadores de éstos...”*

Octavo: Que según se desprende de los preceptos legales citados, en materia de regulación de responsabilidad y de los derechos de control de la empresa principal, la ley establece un agravamiento de la responsabilidad de ésta en el evento que se acredite un incumplimiento en su obligación de ejercer los derechos de control que la ley le otorga, consagrados en el artículo 183-C del Código del Trabajo. En definitiva, si la empresa principal ejerce los derechos de control, será responsable subsidiario de las obligaciones laborales y previsionales de dar que afecten a los contratistas en favor de sus trabajadores; si no los ejerce, la ley eleva su responsabilidad a solidaria, como una forma de sanción por el incumplimiento de un hecho propio, esto es, el no ejercer los respectivos derechos que la legislación le otorga.

En efecto, se ha sostenido por la doctrina que *“...la justificación de esta norma legal es incentivar el sistema de autocontrol del cumplimiento de la legislación laboral: la empresa principal ve agravado su grado de responsabilidad de subsidiaria a solidaria por el hecho propio de no ejercer los derechos que la ley le otorga -de información y retención-. Ambos derechos van dirigidos, precisamente, a velar por el respeto de los derechos del trabajador en régimen de subcontratación”* (Lizama, Luis y Ugarte, José Luis, *Subcontratación y suministro de trabajadores*, Santiago, LegalPublishing, 2009, p .59).

Noveno: Que, bajo el enfoque reseñado precedentemente, se observa la intención del legislador, a partir de la dictación de la Ley N° 20.123, de agravar la responsabilidad de la empresa principal respecto del contratista, atendida la posición



jurídica prevalente de la primera, por la atribución legal de los derechos de información y retención, los que, a la luz del cuerpo normativo en comento, se reconfiguraron, pasando a cautelar, al mismo tiempo, el interés de la empresa principal y, paralelamente, los derechos de los trabajadores, generando un sistema de protección que opera no solo en el nivel de la responsabilidad directa del contratista en su calidad de empleador, sino que, además, la de la empresa principal, respondiendo esta última de las obligaciones laborales que corresponda en caso de no haber ejercido oportunamente los derechos de control que la ley otorga, en calidad de tercero responsable solidariamente.

De este modo, se advierte que los derechos de información y retención no pueden analizarse de una manera autónoma o independiente, toda vez que se encuentran íntimamente ligados entre sí, pues el derecho de retención es dependiente del derecho de información, en el sentido que sólo cuando se ha ejercido previamente este último, de manera íntegra y efectiva, puede ejercerse el primero. Tal es así, que se ha sostenido que “...*el derecho de retención tiene como condición de su existencia la efectiva información por medio idóneo de la existencia de una deuda laboral o previsional con los trabajadores contratados...*” de tal manera que “*no existiendo dicha información, no existe jurídicamente derecho de retención*” (Lizama, Luis y Ugarte, José Luis, ibid. P. 64).

Décimo: Que a la luz de lo razonado en los acápites precedentes, se unifica la jurisprudencia en el sentido que, tratándose del ejercicio de los derechos de información y retención en régimen de subcontratación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 183 letras A,C y D del Código del Trabajo, ninguno de estos derechos cede en favor del otro, sino que ambos se encuentran vinculados entre sí, en el sentido que el derecho de retención tiene como condición de existencia, la efectiva e íntegra información, por medios idóneos, de la existencia de una deuda laboral o previsional con los trabajadores contratados, siendo ambos exigencias que la empresa principal debe cumplir a fin de evitar el agravamiento de responsabilidad que el legislador establece.

Undécimo: Que, de esta manera, habiéndose acreditado en autos que no se dio cumplimiento íntegro al derecho de ser informado, por cuanto los certificados de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales no abarcaron la totalidad del periodo trabajado por los demandantes en régimen de subcontratación, sin haberse adjuntado la nómina de trabajadores respectivos, y existiendo deudas previsionales que datan desde el año 2013, existiendo lagunas durante los años 2014 y 2017,



resulta correcta la decisión de la judicatura de concluir que no se ejerció el derecho de información en forma íntegra, así como tampoco se ejerció el derecho de retención para proceder al pago de la deuda previsional que reportaba su contratista y demandada principal respecto de los periodos indicados, incumpliendo la empresa mandante con lo dispuesto en el artículos 183 letra C del estatuto laboral, por lo que debe responder en forma solidaria de las prestaciones que se ordenan pagar a los actores.

Duodécimo: Que, *obiter dictum*, existe una circunstancia de hecho adicional en el caso *sub lite* que no permite razonar en el sentido propuesto por la recurrente en su intento unificador.

En efecto, y tal como fuera reseñado en la motivación tercera precedente, resultó un hecho acreditado en la presente causa que por resolución de 3 de junio del año 2019, dictada en autos rol C-18233-2019, del 24° Juzgado Civil de Santiago, se declaró la liquidación concursal de la demandada principal, empresa Ingeniería y Maquinarias Indak Limitada, señalando la recurrente que, en los últimos periodos, el ejercicio del derecho de retención se efectuó a través de la entrega de los fondos a la liquidadora concursal, argumentando que lo anterior demostraba el ejercicio efectivo del derecho de retención, razón por lo que debe responder de las obligaciones laborales subsidiariamente y no en forma solidaria.

Sin embargo, dicha alegación no resulta procedente al tenor de lo dispuesto en el artículo 129 N° 6 de la Ley N° 20.720 sobre reorganización y liquidación de empresas y personas, que obliga a no pagar ni entregar mercaderías al deudor, bajo pena de nulidad de los pagos y entregas, y establece la obligación a las personas que tengan bienes o documentos pertenecientes al deudor, de ponerlos a disposición del liquidador, dentro de tercero día.

Así entonces, la entrega de los dineros retenidos por parte de la empresa mandante a la liquidadora de la contratista no obedeció al ejercicio del derecho de retención contemplado en el artículo 183 letra C del estatuto laboral, sino que tuvo como único fundamento el cumplimiento de la obligación legal consagrada en el artículo 129 N° 6 de la Ley N° 20.720, razón por la cual, en la especie, la demandada no cumplió, a lo menos en el último periodo, el derecho de retención antes aludido.

Décimo tercero: Que, de esta manera, si bien se constata la disconformidad denunciada en la interpretación y aplicación dada al precepto analizado en el fallo atacado en relación a aquella de que da cuenta la copia de la



sentencia citada como contraste, no constituye la hipótesis prevista por el legislador para que esta Corte, por la vía del recurso, invalide el fallo de nulidad y altere lo decidido en el fondo, por cuanto los razonamientos esgrimidos en lo sustantivo por la sentencia impugnada para fundamentar su decisión constituyen la tesis correcta, de tal forma que el arbitrio intentado deberá ser desestimado.

Por estas consideraciones y visto, además, lo dispuesto en los artículos 483 y siguientes del Código del Trabajo, se **rechaza** el recurso de unificación de jurisprudencia interpuesto por la parte demandada solidaria, respecto de la sentencia de trece de julio de dos mil veintidós, dictada por la Corte de Apelaciones de Santiago.

Regístrese, notifíquese y devuélvase.

Rol N° 66.585-2022.-

Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros señora Andrea Muñoz S., señor Diego Simpertigue L., el Ministro Suplente señor Mario Gómez M. y los Abogados Integrantes señores Ricardo Abuaud D. y Gonzalo Ruz L. No firma el ministro suplente señor Gómez y el abogado integrante señor Abuaud, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, por haber terminado su periodo de suplencia el primero y por estar ausente el segundo. Santiago, once de septiembre de dos mil veintitrés.



En Santiago, a once de septiembre de dos mil veintitrés, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

